



Asamblea General

Distr. general
22 de agosto de 2012
Español
Original: inglés

Sexagésimo séptimo período de sesiones

Tema 68 a) del programa provisional*

**Eliminación del racismo, la discriminación racial,
la xenofobia y las formas conexas de intolerancia**

Formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia

Nota del Secretario General

El Secretario General tiene el honor de transmitir a la Asamblea General el informe relativo a la aplicación de la resolución 66/143 de la Asamblea General, preparado por el Relator Especial sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia, Mutuma Ruteere.

* A/67/150.



Informe del Relator Especial sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia relativo a la aplicación de la resolución 66/143 de la Asamblea General

Resumen

Este informe se presenta a la Asamblea General en cumplimiento de la resolución 66/143 relativa a la inadmisibilidad de ciertas prácticas que contribuyen a exacerbar las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia, en que la Asamblea solicita al Relator Especial sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia que prepare un informe sobre la aplicación de la resolución, basado en las opiniones expresadas por gobiernos y organizaciones no gubernamentales.

Tras una breve introducción sobre el contenido de la resolución 66/143, el Relator Especial resume la información aportada por 17 Estados sobre la aplicación de la resolución, así como las opiniones enviadas por siete organizaciones no gubernamentales y de otra índole y por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en relación con la cuestión planteada en la resolución. A continuación, el Relator Especial presenta algunas conclusiones y recomendaciones.

Índice

| | <i>Página</i> |
|---|---------------|
| I. Introducción..... | 4 |
| II. Contribuciones recibidas de los Estados Miembros..... | 5 |
| Argentina..... | 5 |
| Armenia..... | 6 |
| Azerbaiyán..... | 6 |
| Chipre..... | 7 |
| Eslovaquia..... | 8 |
| España..... | 9 |
| Federación de Rusia..... | 10 |
| Filipinas..... | 11 |
| Grecia..... | 12 |
| Iraq..... | 13 |
| Jordania..... | 14 |
| Líbano..... | 15 |
| Madagascar..... | 15 |
| México..... | 16 |
| Paraguay..... | 17 |
| Portugal..... | 17 |
| Venezuela (República Bolivariana de)..... | 18 |
| III. Contribuciones recibidas del sistema de las Naciones Unidas, las organizaciones no gubernamentales y otras organizaciones..... | 19 |
| IV. Conclusiones y recomendaciones..... | 21 |

I. Introducción

1. En su resolución 66/143, la Asamblea General, alarmada por la proliferación en muchas partes del mundo de diversos partidos políticos, movimientos y grupos extremistas, incluidos los grupos neonazis y de cabezas rapadas, y de movimientos ideológicos extremistas similares, observó con preocupación, en el párrafo 6, el aumento del número de incidentes racistas en varios países y el surgimiento de grupos de cabezas rapadas, que eran responsables de muchos de esos incidentes, así como el resurgimiento de la violencia racista y xenófoba contra miembros de minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, como observó el Relator Especial sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia (véanse A/HRC/20/38 y A/66/312).

2. En el párrafo 7 de la resolución, la Asamblea reafirmó que tales actos podían considerarse incluidos en el ámbito de las actividades mencionadas en el artículo 4 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial y que podían constituir un abuso claro y manifiesto de los derechos de reunión y de asociación pacíficas y de los derechos a la libertad de opinión y de expresión en el sentido en que esos derechos estaban garantizados por la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial.

3. En el párrafo 9, la Asamblea destacó que las prácticas de esa índole exacerbaban las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia y que contribuían a la proliferación y multiplicación de diversos partidos políticos, movimientos y grupos extremistas, como los grupos neonazis y de cabezas rapadas y, en el párrafo 10, puso de relieve la necesidad de adoptar las medidas que hicieran falta para combatir esos fenómenos.

4. En ese contexto, la Asamblea, en el párrafo 23, recordó la solicitud que la Comisión de Derechos Humanos, en su resolución 2005/5, formuló al Relator Especial para que continuara reflexionando sobre esa cuestión, hiciera las recomendaciones pertinentes en sus informes futuros y recabara y tuviera en cuenta a ese respecto las opiniones de los gobiernos y de las organizaciones no gubernamentales. En el párrafo 24, la Asamblea solicitó al Relator Especial que preparara y presentara a la Asamblea General en su sexagésimo séptimo período de sesiones y al Consejo de Derechos Humanos en su 20º período de sesiones informes sobre la aplicación de la resolución basados en las opiniones recogidas conforme a la solicitud de la Comisión.

5. De acuerdo con la práctica establecida en informes anteriores, en el presente informe se resume la información recibida sobre las actividades pertinentes realizadas por los Estados Miembros de conformidad con la resolución 66/143. Para preparar el informe, el 12 de abril de 2012 la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) envió una nota verbal a los Estados Miembros y una carta a las organizaciones no gubernamentales en que solicitaba información sobre la aplicación de la resolución, que debería recibirse a más tardar el 24 de mayo de 2012. El 13 de agosto de 2012 se habían recibido respuestas de los siguientes 17 Estados Miembros: Argentina, Armenia, Azerbaiyán, Chipre, Eslovaquia, España, Federación de Rusia, Filipinas, Grecia, Iraq, Jordania, Líbano,

Madagascar, México, Paraguay, Portugal y Venezuela (República Bolivariana de). El 24 de mayo de 2012, el Relator Especial había recibido contribuciones de Adalah: Centro jurídico para los derechos de la minoría árabe en Israel y del Centro de Recursos Badil de Defensa de los Derechos de los Refugiados Palestinos y de sus Derechos de Residencia, organizaciones no gubernamentales reconocidas como entidades consultivas por el Consejo Económico y Social, así como de Amis des étrangers au Togo, la Asociación Lituania sin nazismo, personas indígenas de los Estados Unidos de América y organizaciones que las agrupan, British Irish Rights Watch y la Asociación de derechos humanos en el Kurdistan iraní.

6. El ACNUR también presentó una contribución. La información recibida se resume en el presente informe; los textos originales pueden consultarse en la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

II. Contribuciones recibidas de los Estados Miembros

Argentina

7. En su respuesta, el Gobierno de la Argentina señaló que la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial se ha incorporado a su ordenamiento interno y con jerarquía constitucional, a través de la Ley 26.162. La competencia del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial para recibir y examinar comunicaciones de personas o grupos de personas que alegaren ser víctimas de violaciones por parte del Estado de cualquiera de los derechos estipulados en la Convención (art. 14, párr. 1) se reconoce en virtud del artículo 1 de la Ley 17.722, de 26 de abril de 1968.

8. En el artículo 2 de la Ley se estipula que, de conformidad con el artículo 14, párrafos 2 y 3, de la Convención, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo se designa como órgano competente dentro del ordenamiento jurídico nacional para recibir y examinar las comunicaciones previstas en el artículo 1 de la Ley. Desde su establecimiento, el Instituto ha llevado a cabo actividades de visibilización de colectivos históricamente vulnerados y de sensibilización de la sociedad en relación a la no discriminación y el respeto por la diversidad. En el último año el Instituto ha llevado a cabo numerosos actos de reivindicación de las diferentes culturas de la Argentina y ha desarrollado material de capacitación y referencia. El Área de Educación del Instituto diseña e implementa acciones positivas para promover el respeto de los derechos humanos. El Área de Coordinación de Redes de la Sociedad Civil del Instituto se ocupa de constituir espacios de participación y consulta para la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales con el objeto de erradicar la discriminación, la xenofobia y el racismo. El Área de Interculturalidad del Instituto ha creado un proyecto interreligioso que tiene como propósito impulsar el diálogo entre referentes de diversas congregaciones religiosas a partir del trabajo conjunto en la elaboración de materiales temáticos de difusión y capacitación. El Instituto también ha desarrollado el Observatorio de la Discriminación en la Radio y Televisión y el Observatorio de la Discriminación en el Fútbol, a fin de ejercer un seguimiento y análisis del formato y los contenidos de las emisiones de radio y televisión que pudieran incluir cualquier tipo de discriminación.

9. La Ley 23.592 introduce una disposición según la cual la comisión de delitos por persecución u odio a una raza, religión o nacionalidad, o con el objeto de destruir en todo o en parte a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, constituye una circunstancia agravante. La Argentina también ha establecido un plan nacional contra la discriminación basado en la Declaración y Programa de Acción de Durban.

Armenia

10. En su respuesta, el Gobierno de Armenia señaló que, según el Código Penal de la República de Armenia, los actos de incitación al odio nacional, racial o religioso o a la superioridad racial constituían delitos, con las siguientes circunstancias agravantes: uso de medios de difusión en masa; amenaza de uso de la violencia; uso de un cargo oficial; y comisión del delito por un grupo organizado. Según el artículo 21 de la Ley de organizaciones no gubernamentales, el órgano autorizado por el Estado puede presentar una demanda ante un tribunal en que solicite la disolución de una organización si sus actividades tienen por objeto incitar al odio nacional, racial o religioso o instigar a la violencia y a la guerra.

11. La comisión de un delito penal basado en el odio nacional, racial o religioso o el fanatismo religioso constituye una circunstancia agravante que por lo general entraña responsabilidad penal.

Azerbaiyán

12. En su respuesta, el Gobierno de Azerbaiyán insistió en que el Ministerio del Interior se encargaba de adoptar las medidas necesarias para luchar contra la discriminación y la xenofobia de conformidad con la Constitución y otros textos legislativos. El Gobierno hizo referencia al Concepto de Seguridad Nacional de Azerbaiyán de 2007, que contenía disposiciones cruciales para salvaguardar la tolerancia nacional y religiosa.

13. De conformidad con el Plan de acción nacional para la protección de los derechos humanos, se llevaron a cabo actividades de concienciación para fortalecer el diálogo intercultural y la cooperación interconfesional; proteger y promover el patrimonio cultural de las minorías étnicas; prohibir la discriminación; y promover una cultura de paz y tolerancia en los distritos y regiones del país. También se adoptaron medidas de concienciación en el ámbito de la tolerancia religiosa.

14. Las actividades que promueven la discriminación racial y religiosa están prohibidas. El Comité Estatal de Colaboración con las Organizaciones Religiosas prohíbe la importación y difusión de escritos perniciosos que provoquen enfrentamientos entre religiones y confesiones y propaguen el extremismo religioso e ideas inhumanas.

15. El Gobierno hizo referencia al diálogo intercultural sobre las relaciones entre la Unión Europea y Azerbaiyán celebrado en la sede del Parlamento Europeo en Bruselas en 2011 y al Foro Mundial sobre el diálogo intercultural celebrado en Bakú en ese mismo año. El Gobierno señaló que concedía especial importancia a la educación en derechos humanos y que el Ministerio de Educación organizaba actividades frecuentes para promover el respeto por las personas de culturas, etnias y religiones diferentes. Asimismo, el Ministerio de Educación ofrecía oportunidades

para estudiar los idiomas, la historia y la cultura de las minorías étnicas. Los miembros de las minorías nacionales podrían recibir educación escolar en sus idiomas nativos.

16. Los diarios y revistas se publican en los idiomas de las minorías nacionales y la emisora de radio pública emite periódicamente programas en los idiomas de las minorías nacionales. Asimismo, las emisoras de televisión regionales emiten programas en los idiomas de los grupos minoritarios.

17. Azerbaiyán es parte en la Convención sobre la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales de la UNESCO. A este respecto, se ha preparado un plan de acción y se han organizado varios eventos, incluida la publicación de folletos que reflejan la diversidad cultural del país y la organización de exposiciones, conciertos, concursos y otras actividades similares.

Chipre

18. En su respuesta, el Gobierno de Chipre señaló que en la Ley de lucha contra ciertas formas y expresiones de racismo y xenofobia por medio del derecho penal se tipificaba la incitación pública a la violencia o al odio dirigidos contra un grupo de personas o un miembro de tal grupo, definido en relación con la raza, el color, la religión, la ascendencia o el origen nacional o étnico, y la apología pública, la negación o la trivialización de los crímenes de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. La Ley también afirma que la motivación racista o xenófoba de un delito constituye una circunstancia agravante.

19. La Ley 13/67, por la que se ratifica la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación, se enmendó para crear varios delitos relativos al racismo y asegurar que el elemento de la intención dejara de ser parte del delito de incitación a cometer actos de discriminación.

20. Los artículos 2A 1) y 2) de la Ley estipulan que toda persona que públicamente, de manera oral o en la prensa, o mediante escritos, imágenes u otros materiales, incite a cometer actos que puedan causar discriminación, odio o violencia contra una persona o grupo de personas aduciendo razones de origen racial o étnico o de religión, será culpable de un delito sancionable con una pena de prisión o una multa; toda persona que cree o integre una organización que promueva actividades organizadas con fines propagandísticos o de otra índole que tengan por objeto la discriminación racial será culpable de un delito sancionado con esas mismas penas. El artículo 2A 3) estipula que toda persona que públicamente, de manera oral o en la prensa, o mediante escritos, imágenes u otros materiales, exprese ideas que injurien a una persona o grupo de personas aduciendo razones de origen racial o étnico o de religión será culpable de un delito sancionable con una pena de prisión o una multa.

21. Chipre ha ratificado la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, el Protocolo núm. 12 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y el Protocolo Adicional del Convenio sobre la Ciberdelincuencia del Consejo de Europa, relativo a la tipificación de los actos racistas y xenófobos cometidos por medio de sistemas informáticos.

22. En determinadas condiciones se concede asistencia letrada en los procedimientos judiciales a los refugiados y los solicitantes de asilo y en el contexto del retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular.

23. La Oficina de Derechos Humanos, establecida en 2000, está subordinada a la División de la Unión Europea y de Cooperación con la Policía Internacional de la Dirección General de la Policía. La Oficina promueve activamente la promoción de los derechos de los detenidos, especialmente los que no son nacionales de Chipre, y se encarga de supervisar las condiciones de vida en los centros de detención y preparar informes en que formula propuestas al Director General de la Policía para que los centros cumplan las normas internacionales. La Oficina organiza seminarios y actividades de capacitación en derechos humanos y actividades policiales en la Academia de Policía.

24. En 2005, la policía de Chipre estableció la Oficina de Lucha contra la Discriminación. La Oficina se encarga de las cuestiones relativas a la discriminación, el racismo y la xenofobia y cuenta con oficiales de enlace destinados en todas las comisarías de policía regionales. La Oficina coopera con otros departamentos de la policía y con otras organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, y registra los delitos de motivación racista en un registro electrónico. Los delitos se clasifican según el tipo de motivación, como la etnia, la religión o el color de piel; el registro se actualiza dos veces al año.

25. Los oficiales de enlace destinados en las comisarías de policía regionales se encargan de mantener contactos con los dirigentes locales o los miembros de las comunidades étnicas y centran su atención en las cuestiones raciales y étnicas. En colaboración con la Oficina de Lucha contra la Discriminación, los oficiales de enlace se ocupan de los delitos e incidentes de motivación racial. La policía, en cooperación con las asociaciones y los líderes de las diversas comunidades étnicas, organiza actos sociales abiertos al público para promover el entendimiento y el respeto mutuos entre la policía y esas comunidades. Se hizo referencia, entre otras cosas, a la ejecución del Programa de acción comunitario para combatir la discriminación.

26. Las cuestiones de derechos humanos se incluyen en los planes de capacitación de todos los oficiales de policía y los cursos sobre derechos humanos se refuerzan mediante la participación de profesionales vinculados al mundo académico o con experiencia en el ámbito de los derechos humanos. La capacitación de la policía en cuestiones de discriminación hace hincapié en la armonización de la mentalidad de los agentes de policía con el nuevo entorno multicultural de la sociedad chipriota e insiste en que estos adopten y mantengan una actitud positiva hacia todas las personas, independientemente de su cultura, costumbres, religión y orígenes. Los miembros de la policía también participan en seminarios relacionados con los derechos humanos, la discriminación y el racismo organizados en el extranjero.

Eslovaquia

27. El Gobierno de Eslovaquia indicó que se prohíbe la discriminación, entre otras cosas, por motivos de color, idioma, origen nacional o sexo. De conformidad con el párrafo 1 de la sección 10 de la Ley sobre el derecho de reunión, el municipio de que se trate puede prohibir la celebración de una asamblea cuyo propósito sea llamar a la denegación o la limitación de los derechos de los ciudadanos a causa de su

nacionalidad, sexo, raza, origen, opiniones políticas o de otra índole, religión o condición social, o incitar al odio y la intolerancia por dichos motivos.

28. La Ley sobre la asociación de ciudadanos prohíbe las asociaciones cuyo objetivo sea denegar o limitar los derechos de los ciudadanos en razón de su nacionalidad, sexo, raza, origen, religión o condición social, o de sus opiniones políticas o de otra índole, o incitar al odio y la intolerancia por esas razones. El Código Penal prevé delitos relacionados con el extremismo, inclusive la fabricación, difusión y posesión de materiales extremistas, y la incitación al odio nacional, racial y étnico. El Código Penal prevé una circunstancia agravante aplicable en general a los delitos cometidos con una motivación específica, incluidos los delitos cometidos con la intención de incitar públicamente a la violencia o al odio contra un grupo de personas o una persona, entre otras cosas, por motivo de su raza, nacionalidad, grupo étnico o religión.

29. El Gobierno ha adoptado una estrategia de lucha contra el extremismo para los años comprendidos entre 2011 y 2014. El propósito de la estrategia es eliminar las causas, manifestaciones y consecuencias del extremismo y de los delitos con motivación racial. En los programas de capacitación de la Academia de Policía se aborda la cuestión de los derechos humanos. La violación del principio de igualdad de tratamiento por un oficial de policía se considera un incumplimiento de los deberes que impone el servicio. La autoridad competente para la investigación penal de oficiales de policía es la Oficina del Servicio de Inspección del Ministerio del Interior.

30. En 2011, el Departamento de lucha contra el extremismo y la violencia de espectadores de la Oficina de la Policía Criminal del Presidium de la Fuerza de Policía organizó una conferencia sobre el extremismo. En 2011 también se celebró una conferencia virtual titulada “El extremismo: una amenaza para la sociedad democrática”. También se hizo referencia a la actividad de capacitación organizada por el Departamento de lucha contra el extremismo y la violencia de espectadores para el Servicio de la Fiscalía General de la República Eslovaca y la Academia Judicial. El Gobierno también proporcionó información sobre los proyectos a nivel de condados para hacer frente a la intolerancia racial y combatir la discriminación contra los romaníes; los programas de prevención y educación; y las conferencias y conversaciones dedicadas a los temas del racismo, el Holocausto, los extranjeros y el origen étnico.

España

31. España indicó que el derecho a la igualdad estaba consagrado en el artículo 14 de la Constitución y que se había establecido el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, que desarrollaba las políticas del Gobierno en materia de igualdad, de prevención y eliminación de toda clase de discriminación.

32. El Consejo para la Promoción de la Igualdad de Trato y la No Discriminación de las Personas por el Origen Racial o Étnico presta asistencia a las víctimas de discriminación, tramita sus reclamaciones, realiza estudios y formula recomendaciones en materia de igualdad de trato y prevención de la discriminación de las personas por su origen racial o étnico.

33. El Gobierno hizo referencia a la Estrategia Integral de 2011 contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y otras formas conexas de Intolerancia, la Estrategia Nacional para la Inclusión Social de la Población Gitana en España 2012-2020 y el Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración 2011-2014.

34. Se está elaborando actualmente un mapa de la discriminación en España y su incidencia a fin de conocer las percepciones sociales del conjunto de la población sobre la discriminación, así como de las víctimas. El mapa constituirá una herramienta esencial para mejorar la legislación y las políticas públicas encaminadas a garantizar la igualdad de trato y la no discriminación en España.

35. El Gobierno hizo referencia al Proyecto Todoimás: Foro 2011 para la igualdad de trato y la no discriminación, en el que representantes de las administraciones públicas debaten con los movimientos sociales y los interlocutores sociales sobre los contenidos mínimos que deberían integrar las políticas en favor de la igualdad de trato y la no discriminación. También se hizo referencia a la elaboración de un Plan Local de Actuación Integral contra la Discriminación con el objetivo de dotar a las entidades locales de las herramientas adecuadas para la puesta en marcha de políticas, sin olvidar la creación de oficinas para la no discriminación por parte de corporaciones locales.

36. En la Ley General de Comunicación Audiovisual de 2010 se prohíbe la incitación al odio o a la discriminación. Se han adoptado medidas para incorporar la lucha contra el racismo y la xenofobia en Internet, entre ellas el establecimiento de una fiscalía especial sobre la ciberdelincuencia en todas las fiscalías del Estado y la creación en las fuerzas de seguridad del Estado de servicios especializados en ciberdelincuencia.

37. Se han emprendido varios proyectos para garantizar la igualdad de trato de los inmigrantes y las minorías étnicas en el mundo laboral. Algunos programas se centran específicamente en la población gitana, inclusive en la esfera de la educación.

38. En cuanto a las medidas legislativas, el Gobierno hizo referencia a las disposiciones contra la discriminación establecidas en el Código Penal, así como a otras disposiciones jurídicas relativas a la prohibición de actos discriminatorios contra extranjeros, la prohibición de partidos políticos racistas, la discriminación en el deporte y la eliminación del racismo, la xenofobia y otras formas de intolerancia en ámbitos específicos, incluido el acceso a bienes y servicios sociales.

Federación de Rusia

39. El Gobierno de la Federación de Rusia afirmó que se prestaba especial atención a la eliminación de las diversas manifestaciones del racismo basado en la ideología nazi, especialmente entre los jóvenes. Se hizo referencia al proyecto de 2011 sobre la aplicación de medidas para la colaboración sistemática entre autoridades estatales, organizaciones de la sociedad civil e instituciones educativas en la prevención del extremismo entre los jóvenes. Se han llevado a cabo debates públicos para examinar este problema, y se han creado recursos de Internet sobre los temas de la prevención del extremismo y el respeto de las diversas culturas y tradiciones, independientemente de la nacionalidad.

40. Entre 2009 y 2011 se elaboraron nuevas normas federales de educación y, con el fin de promover el entendimiento mutuo y la tolerancia en la educación, se incluyó el tema del Holocausto en los programas de estudio escolares y las normas educativas estatales. En el segundo semestre de 2012, las instituciones que dependen del Ministerio de Educación y Ciencia tienen previsto celebrar diferentes reuniones internacionales, seminarios y conferencias académicas y de estudiantes dedicados a la historia de la Federación de Rusia, incluidos los dramáticos acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial.

41. El Ministerio de Educación y Ciencia y otros ministerios competentes han puesto en marcha un nuevo curso sobre culturas religiosas y ética laica con la participación de importantes organizaciones religiosas e instituciones científicas y educativas. El curso tiene como objetivo, entre otras cosas, sensibilizar a los niños pequeños y desarrollar su capacidad para comunicarse en un entorno multiétnico y pluriconfesional sobre la base del respeto mutuo y el diálogo.

42. Se presentó información acerca de la Ley modelo sobre la inadmisibilidad de las acciones dirigidas a rehabilitar el nazismo y glorificar a los criminales nazis y sus cómplices, aprobada el 17 de mayo de 2012 por la Asamblea Interparlamentaria de la Comunidad de Estados Independientes. La ley se refiere a los principios y normas del derecho internacional, incluida la Carta de las Naciones Unidas, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad, y la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial. La ley prohíbe, entre otras cosas, la difusión de material nazi por los medios de comunicación; el uso de imágenes que representen a los criminales nazis y sus cómplices en comerciales publicitarios; el uso de símbolos nazis y la difusión de materiales nazis durante eventos públicos; el establecimiento de asociaciones públicas, religiosas y de otro tipo cuyo objetivo y labor muestren indicios de rehabilitación del nazismo, la glorificación de los criminales nazis y sus cómplices; y el uso de la Internet para difundir materiales nazis. La ley también prevé medidas para prevenir y vigilar esos fenómenos con el fin de detectar y eliminar las condiciones que propicien la rehabilitación del nazismo. Estas medidas incluyen el examen de materiales y documentos por los órganos competentes para detectar indicios de rehabilitación del nazismo y glorificación de los criminales nazis y sus cómplices, y el control parlamentario del cumplimiento de la ley.

Filipinas

43. El Gobierno de Filipinas destacó que la creciente población de migrantes en todo el mundo estaba cada vez más expuesta a actos y expresiones de racismo, discriminación, xenofobia e intolerancia, y que la protección de los trabajadores migrantes seguía siendo una prioridad. El bienestar de los trabajadores migrantes está garantizado mediante una política firme y un marco de leyes, normas y reglamentos, y programas que abarcan todo el proceso de migración desde el período previo a la partida hasta el retorno y la reintegración. El aumento del número de ratificaciones de la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, que garantiza la no discriminación, la protección contra la violencia, las amenazas y la intimidación,

y el respeto de la identidad cultural, debería figurar entre las principales recomendaciones del Relator Especial.

Grecia

44. En su respuesta, el Gobierno de Grecia señaló que el marco normativo griego sobre discriminación racial contenía disposiciones restrictivas y de protección que abarcaban todos los aspectos del reconocimiento, disfrute y ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales, independientemente de la raza y el origen étnico. La Constitución establece principios fundamentales y define derechos constitucionales básicos a fin de proteger a los extranjeros y a otras personas frente a las agresiones de motivación racial y garantizar el respeto de la vida, la libertad y la dignidad. El artículo 5 de la Constitución garantiza a todas las personas que se encuentren en territorio griego protección absoluta de su vida, dignidad y libertad, sin discriminación por motivos de nacionalidad, raza, idioma o creencias religiosas o políticas.

45. La Ley 927/1979, complementada por la Ley 1419/1984, prohíbe y sanciona la discriminación por motivos de raza, origen étnico y creencias religiosas. En particular, se tipifican tres tipos de delitos: la incitación a cometer actos que pudieran dar lugar a discriminación, odio o violencia contra personas o grupos de personas debido a su origen racial o nacional o a su religión; el establecimiento de organizaciones con el fin de llevar a cabo actividades discriminatorias o propagandísticas, o la participación en ellas; y la expresión oficial de ideas que injurien a personas o grupos de personas por su origen étnico o racial. Las actuaciones judiciales contra los delitos anteriormente mencionados se inician de oficio. De conformidad con la Ley 3719/2008, la comisión de ese tipo de delitos por motivos de odio étnico, racial o religioso constituye una circunstancia agravante.

46. La Ley 3304/2005 constituye el marco normativo general en que se encuadra la lucha contra la discriminación en el empleo y la aplicación del principio de igualdad de trato independientemente del origen racial o étnico, las creencias religiosas o de otro tipo, el tipo de discapacidad o la orientación sexual. La Ley establece órganos encargados de promover el principio de la igualdad de trato, incluido el Ombudsman, que examina las denuncias de violaciones presuntamente cometidas por funcionarios públicos; la Inspección de Trabajo; y el Comité de Igualdad de Trato, que se encarga de las denuncias de violaciones cometidas por personas físicas y que recibe asistencia del Servicio de Igualdad de Trato del Ministerio de Justicia, Transparencia y Derechos Humanos.

47. El Gobierno hizo referencia a un nuevo proyecto de ley para la incorporación en el ordenamiento jurídico de Grecia de la Decisión Marco 2008/913/JAI relativa a la lucha contra determinadas formas y manifestaciones de racismo y xenofobia mediante el Derecho penal. La ley dispone el enjuiciamiento de los delitos motivados por el racismo y la intolerancia; la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas responsables de cualquier manifestación de racismo o intolerancia; y la ampliación de los motivos de discriminación a fin de incluir también la discriminación basada en la orientación sexual. Grecia ha firmado el Convenio sobre la Ciberdelincuencia y su Protocolo adicional relativo a la tipificación de los actos racistas y xenófobos cometidos por medio de sistemas informáticos. Un comité legislativo especial ha evaluado el proyecto de ley y lo ha

transmitido al Ministerio de Justicia para su aprobación final antes de que se presente al Parlamento.

48. La Ley 3386/05 relativa a la entrada, residencia e integración social de nacionales de terceros países en territorio helénico, define procedimientos transparentes en relación con la entrada de migrantes y la renovación de sus permisos de residencia y garantiza que los migrantes puedan ejercer sus derechos. La Ley 3852/2010 dispone el establecimiento de consejos municipales para la integración de los migrantes.

49. El Gobierno ha redactado una estrategia nacional para la integración de nacionales de terceros países que ha servido de base para poner en marcha un proceso amplio de consultas entre el Gobierno y los organismos no gubernamentales. El Gobierno también hizo referencia a los programas y acciones anuales financiados por el Fondo Europeo para la Integración de Nacionales de Terceros Países, destinados a facilitar la integración local de las poblaciones de migrantes.

Iraq

50. En su respuesta, el Gobierno del Iraq afirmó que las prácticas mencionadas en la resolución 66/143 de la Asamblea General eran la causa fundamental de la ruptura de los vínculos comunitarios y provocaban caos y agitación entre los ciudadanos de un país o entre diferentes países. Tales prácticas envenenan la mente de los jóvenes con ideas racistas basadas en la violencia y la xenofobia, lo que significa que los miembros de las minorías nacionales, étnicas, religiosas y lingüísticas pasan a ser el blanco de ataques, lo cual, a su vez, representa una amenaza para la paz en general.

51. Los Estados deben llevar a cabo las acciones necesarias para poner fin a esas prácticas racistas mediante la adopción de una serie de medidas, como promulgar leyes y estatutos para penalizar esas prácticas y establecer sanciones para frenarlas; promover el papel de las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales en el fomento de una cultura de tolerancia entre las minorías y fortalecer los lazos de coexistencia pacífica y la aceptación de los demás; y poner en marcha iniciativas encaminadas a acercar a las culturas y conciliar los puntos de vista de las diversas comunidades mediante diálogos y reuniones, incluidos talleres y cursos de capacitación para funcionarios públicos, profesionales de los medios de comunicación y personas que desempeñan un papel activo en la sociedad civil.

52. El Gobierno subrayó la importancia de optimizar el uso de la Internet con el fin de evitar el uso de sitios web que promuevan ideas racistas, la xenofobia y la discriminación racial, así como la importancia de adoptar medidas para limitar la presencia de dichos sitios web mediante el fomento de una cultura de paz, la coexistencia y la tolerancia en la web a nivel mundial.

53. El Gobierno proporcionó información sobre las medidas que se habían adoptado para frenar dichas prácticas y destacó las disposiciones de la Constitución del Iraq, que es el instrumento supremo que garantiza el respeto de los derechos humanos y de los principios de igualdad y no discriminación. La Constitución prohíbe las entidades que incitan al odio religioso, la discriminación, la agresión o la violencia. La Constitución también garantiza varios derechos y libertades, como el derecho a la libertad de expresión, reunión y manifestación pacífica, el derecho a

constituir asociaciones y partidos políticos y a afiliarse a ellos, el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de creencias, y la libertad de culto. Se están realizando esfuerzos para garantizar el pleno respeto y la protección de los lugares de culto, santuarios, templos y símbolos, y se están adoptando otras medidas para proteger los lugares sagrados contra la profanación y los atentados. La Constitución también garantiza a los niños de las minorías una educación en su lengua materna en las instituciones educativas tanto gubernamentales como privadas.

54. Desde su establecimiento, el Ministerio de Derechos Humanos se ha esforzado por eliminar las prácticas racistas, la discriminación racial y la xenofobia organizando, por conducto del Centro Nacional de Derechos Humanos, talleres, cursos y seminarios de capacitación, y mediante la incorporación de los principios de derechos humanos y la cultura de la tolerancia en los planes de estudios en todas las etapas.

Jordania

55. En su respuesta, el Gobierno de Jordania indicó que en el párrafo 1 del artículo 6 de la Constitución se establece que todos los jordanos son iguales ante la ley y tienen los mismos derechos y obligaciones, sin discriminación por motivos de raza, idioma o religión. De conformidad con la Ley núm. 26 de 2010, que modifica el Código del Trabajo, ya no se requiere que los trabajadores sean ciudadanos jordanos para afiliarse a los sindicatos. La Ley de Elecciones provisional de la Cámara de Diputados núm. 9, de 2010, dispone que los discursos, las declaraciones y la publicidad electoral deben excluir todo material que, de forma directa o indirecta, cause daño a cualquier candidato o provoque tensiones sectarias, tribales, regionales, provinciales o raciales entre los ciudadanos.

56. Todo acto de violencia o toda incitación contra una persona o grupo por motivos de raza, color, ascendencia u origen nacional o racial constituye un delito punible conforme a la ley. Con el fin de declarar ilegales y prohibir las organizaciones y todas las actividades de propaganda que promuevan la discriminación racial o inciten a ella, y de reconocer que la participación en tales organizaciones y actividades constituye un delito punible conforme a la ley, el artículo 151 del Código Penal establece que se aplicarán las mismas penas (una pena de prisión de seis meses a tres años y una multa de hasta 50 dinares) a todas las personas que pertenezcan a una asociación constituida para los fines mencionados en el artículo 151 del Código. La pena de prisión mínima se ha aumentado a un año y la multa se ha aumentado en 10 dinares para los casos en que el culpable desempeña una función oficial en tal asociación. En todos los casos, se disolverá la asociación y se confiscarán sus activos.

57. Se han establecido leyes y reglamentos para brindar más protección a los trabajadores jordanos y no jordanos. Las disposiciones del Código de Trabajo se aplican a todos los trabajadores, independientemente de su sexo, nacionalidad, raza, color o religión.

58. El Gobierno destacó el papel de la Dirección de Seguridad General en la lucha contra la discriminación racial. En cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, la Dirección de Seguridad reprime toda acción que pueda

alentar la discriminación racial. Sobre la base de la política de llamamiento al equilibrio, la Dirección de Seguridad General procura aplicar los conceptos mencionados anteriormente, incluso adoptando medidas punitivas y administrativas para mantener el orden y prevenir la aparición de grupos extremistas que propugnen la violencia basada en el racismo y la xenofobia; capacitando y certificando a los empleados del aparato de seguridad pública para recabar información acerca de los grupos extremistas y transmitirla a las autoridades judiciales competentes; estudiando el Mensaje emitido por el Rey Amman en 2004 y difundiendo sus principios; adoptando medidas para prevenir la difusión de ideas que puedan incitar al odio o la discriminación; adoptando medidas estrictas para combatir cualquier incitación a la discriminación; tomando medidas para garantizar a todas las personas la igualdad de oportunidades para recurrir a la policía y al poder judicial; y contratando a miembros de las comunidades locales de diferentes regiones, independientemente de su origen.

59. La Dirección de Seguridad General ha establecido una Oficina de Derechos Humanos que tiene competencia para examinar y tramitar denuncias de violaciones de los derechos humanos en general y para tomar las medidas jurídicas necesarias. La Oficina organiza cursos de capacitación para los miembros de la Dirección en diversas esferas relativas a los derechos humanos, incluida la lucha contra la discriminación racial.

Líbano

60. En su respuesta, el Gobierno del Líbano señaló que las prácticas que contribuían a exacerbar las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia, que tenían lugar en otros países, eran inexistentes en el Líbano. A fin de combatir esas prácticas es necesario que los Estados Miembros de las Naciones Unidas realicen esfuerzos concertados para abordar las causas de dichas prácticas y establecer una cooperación en ese sentido.

61. El Gobierno proporcionó información sobre las actividades de las fuerzas de seguridad interna. Las divisiones territoriales de esta unidad llevan a cabo las medidas e investigaciones necesarias respecto de todas las quejas recibidas directamente por ellas o referidas a ellas por las fiscalías competentes de conformidad con las leyes aplicables, independientemente de si el autor de la queja o la persona contra la cual se interpone la queja es un ciudadano extranjero. Dichas divisiones cumplen sus funciones judiciales sobre la base de leyes, directrices e instrucciones conforme a las cuales los investigadores están obligados a respetar los derechos humanos. La Dirección General de Seguridad Pública ejecuta las decisiones del poder ejecutivo y, en el marco de sus competencias, investiga a cualquier grupo o persona que constituya una posible amenaza para la seguridad y la estabilidad, incluidas las organizaciones o actividades basadas en premisas racistas.

Madagascar

62. La Ley núm. 68.021, de 17 de diciembre de 1968, incorporó la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial en la legislación nacional de Madagascar. Los principios de igualdad y de no discriminación, incluso por motivos de sexo, origen y raza, están consagrados en el

artículo 6.3 de la Constitución. La ley sanciona los actos de difamación que dan lugar a discriminación, odio o violencia contra una persona por motivos de su origen, color, sexo, raza o religión, y el Código del Trabajo contiene disposiciones relativas al respeto de la dignidad de la persona. El Código Penal sanciona la limitación del ejercicio de un derecho, entre otras cosas, por motivos de color, sexo, origen étnico, raza o religión. Se han establecido instituciones nacionales de derechos humanos, incluida la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Comité Nacional de Lucha contra la Discriminación Racial, que requieren la participación de los departamentos ministeriales competentes, miembros de la sociedad civil y organizaciones no gubernamentales.

63. Se consultará con todos los ministerios competentes y se procurará la participación de las organizaciones de la sociedad civil en la elaboración de las leyes necesarias. Se presentará un proyecto de ley al Comité de Reformas Legislativas del Ministerio de Justicia. A fin de aplicar la resolución de la Asamblea General, se tipificarán como delitos los siguientes actos: la difusión o propagación de ideas basadas en la superioridad racial, los actos de violencia y la incitación a la discriminación racial, cualquier violación grave y flagrante o limitación de la libertad de opinión y de expresión y la libertad de asociación y de reunión; y la difamación de una raza o grupo étnico. El Gobierno hizo referencia a la ejecución de varios programas, en particular a actividades de capacitación y educación en materia de derechos humanos, el racismo y la discriminación racial; medidas para mejorar la situación de determinados grupos étnicos o personas que necesitan una mayor protección en el disfrute de sus libertades; actividades de sensibilización que realizan funcionarios públicos en colaboración con miembros de la sociedad civil; medidas dirigidas a los medios de comunicación, incluso respecto de la difusión o la propaganda de ideas de superioridad racial; y a la capacitación sobre la eliminación de la discriminación racial, que forma parte de los programas nacionales de capacitación dirigidos a los medios de comunicación, agentes del orden, jueces y funcionarios públicos.

México

64. En su respuesta, el Gobierno de México destacó las enmiendas constitucionales y reformas legislativas que ha llevado a cabo y las instituciones y políticas establecidas para poner fin a la discriminación. La ley prohíbe la discriminación racial y la xenofobia y, a partir de abril de 2012, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación ha incluido la segregación racial y otras formas de intolerancia. En el plano local, 12 estados han tipificado la discriminación como delito, de conformidad con el artículo 1 de la Constitución Federal.

65. El Programa Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación, que se publicó el 16 de abril de 2012, tiene por objeto, entre otras cosas, orientar las políticas públicas para generar datos, estadísticas, investigaciones y conocimientos sobre la cuestión de la discriminación; promover el principio de la no discriminación en la administración pública y dentro de los estados; crear una cultura de no discriminación en la sociedad; y adoptar medidas concretas para garantizar la igualdad de oportunidades. En 2011, el Gobierno, por conducto del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, publicó una guía a fin de ayudar al sector público a diseñar políticas públicas para prevenir la discriminación contra las comunidades afrodescendientes y asegurar su inclusión.

66. En 2011 se llevó a cabo una campaña de sensibilización sobre el racismo, que estuvo dirigida al público general, en particular a los niños y niñas de entre 3 y 9 años de edad. Asimismo, en 2011 se publicó un manual en el que se presentan los conceptos básicos y directrices sobre la discriminación con el fin de sensibilizar a los periodistas sobre los artículos y la cobertura de noticias discriminatorios.

67. La Ley sobre Refugiados prevé el principio de la no discriminación y otorga al Ministerio del Interior el mandato de adoptar todas las medidas necesarias para prevenir la discriminación contra los refugiados. La Ley de inmigración también prevé el respeto de los derechos humanos y la no discriminación como principios rectores de la política nacional de inmigración, incluso la que se aplica a los migrantes en situación irregular. En colaboración con organizaciones no gubernamentales que trabajan con inmigrantes y refugiados, se elaboraron materiales educativos y de sensibilización para informar a los migrantes y refugiados sobre sus derechos y sobre los recursos jurídicos de que disponen en caso de violaciones. Cada año, a partir de 2007, se celebra la Semana del Refugiado. También se hizo referencia a las medidas adoptadas para facilitar la integración de los refugiados y ayudarlos a acceder a los servicios públicos, incluidos los servicios de educación y atención de la salud, así como a las medidas dirigidas a reforzar la capacidad de los funcionarios públicos, en particular los funcionarios de inmigración, en lo que respecta a los derechos de los refugiados.

Paraguay

68. El Gobierno del Paraguay indicó que la Secretaría Nacional de la Cultura era uno de los departamentos fundamentales para la aplicación de políticas destinadas a combatir la discriminación, el racismo y la xenofobia. Promueve la inclusión, la no discriminación y el apoyo a la diversidad de actores culturales y de la ciudadanía en general. El poder ejecutivo también ha abordado las cuestiones de la igualdad y la no discriminación mediante una red coordinada de derechos humanos que abarca a varios ministerios y secretarías. A este respecto, se hizo referencia a la “Propuesta de Plan Nacional de Derechos Humanos” en el eje estratégico I (Transformación de las desigualdades estructurales para el goce de los derechos humanos) que se ha puesto en marcha recientemente.

69. El Paraguay no tiene una legislación específica sobre la protección de las personas contra la discriminación, el racismo y la xenofobia, aunque el artículo 46 de la Constitución reconoce el derecho fundamental a la no discriminación. El Parlamento viene examinando desde hace algún tiempo un proyecto de ley contra la discriminación con miras a aumentar la protección contra la discriminación por diversas causas, así como contra el racismo, la xenofobia y formas conexas de intolerancia.

Portugal

70. El Gobierno de Portugal señaló que el principio de igualdad estaba consagrado en el artículo 13 de la Constitución. La Ley núm. 18/2004 establece un marco para luchar contra la discriminación por motivos de raza u origen étnico. En virtud del Código Penal, la persona que funde o establezca una organización o lleve a cabo actividades de propaganda organizada para incitar o promover la discriminación, el

odio o la violencia contra una persona o un grupo de personas por motivo de su raza, o que participe en este tipo de organización o en sus actividades, o les brinde respaldo, será castigada con una pena de prisión de uno a ocho años. Además, la motivación racial se considera una circunstancia agravante que da lugar a la imposición de sanciones más severas en los casos de homicidio y delitos contra la integridad física. Cualquier persona puede presentar una denuncia administrativa de discriminación racial contra cualquier autoridad, servicio público o persona a la Comisión para la Igualdad y contra la Discriminación Racial. El Ombudsman (Provedor de Justiça) también tiene competencia para conocer de demandas relativas a actos de racismo y discriminación cometidos por autoridades públicas.

71. Para hacer frente al fenómeno del neonazismo o neofascismo se requiere un enfoque global. El párrafo 4 del artículo 46 de la Constitución prohíbe el establecimiento de asociaciones y organizaciones de carácter racista o con una ideología fascista. Los partidos de extrema derecha que difunden actitudes racistas y la xenofobia no consiguieron resultados electorales considerables en Portugal, donde tampoco se ha desarrollado un sentimiento contra los inmigrantes en la opinión pública. Con el fin de poner en práctica sus políticas, Portugal ha establecido una institución pública que, entre otras competencias, está encargada de combatir el racismo, promover la integración de los inmigrantes y de las comunidades romaníes y promover el diálogo intercultural.

72. La Dependencia Nacional de Policía Criminal contra el Terrorismo supervisa periódicamente los sitios web, los espacios de chat y otros foros web asociados o vinculados a grupos violentos de extrema derecha, como los vinculados a los Hamerskins portugueses. La Guardia Nacional Republicana y la Policía de Seguridad Pública realizan acciones de prevención y represión, inclusive durante las manifestaciones públicas organizadas por movimientos extremistas y entre grupos de seguidores de equipos deportivos. El sitio web de la Comisión para la Igualdad y contra la Discriminación Racial cuenta con una herramienta especial denominada “El racismo en la Internet”, que incluye un enlace a un proyecto nacional denominado “Internet segura”, en el que los ciudadanos pueden presentar quejas contra blogs o sitios web con contenido racista.

Venezuela (República Bolivariana de)

73. El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela destacó que los movimientos y grupos extremistas representaban una amenaza para la democracia. Condenó todo intento de cualquier organización o movimiento de promover prácticas racistas o restablecer las ideologías basadas en la superioridad racial, étnica o religiosa, así como cualquier manifestación contemporánea de racismo o xenofobia que pretendiera promover el odio y la discriminación racial.

74. El Gobierno exhortó a la comunidad internacional a hacer frente enérgicamente a las amenazas que genera el resurgimiento de prácticas racistas y las ideologías basadas en la superioridad racial, étnica o religiosa, mediante la promoción de políticas que contribuyan al fortalecimiento y consolidación de las sociedades armónicas y democráticas. También instó a la plena aplicación de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial y los compromisos derivados de la Declaración y Programa de Acción de Durban y del documento final de la Conferencia de Examen de Durban.

III. Contribuciones recibidas del sistema de las Naciones Unidas, las organizaciones no gubernamentales y otras organizaciones

75. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) expresó su preocupación por el clima imperante de intolerancia, xenofobia y racismo contra los refugiados, los solicitantes de asilo y otras personas de las que se ocupa el ACNUR en muchos países. Indicó que los marcos jurídicos nacionales contra el racismo eran a menudo demasiado débiles. Por ejemplo, en los códigos penales a veces falta una definición de discriminación racial o no se penalizan los delitos motivados por el odio o las organizaciones racistas; existen leyes restrictivas en materia de asilo y migración en las que a veces se hace caso omiso del derecho internacional sobre los refugiados y las normas internacionales de derechos humanos, incluidas leyes que castigan la entrada y permanencia irregular, permiten la detención prolongada de solicitantes de asilo sin la disponibilidad de un proceso de examen, o no ofrecen salvaguardias y recursos de apelación apropiados para evitar la devolución. Además, la discriminación por motivos de raza u origen étnico, a veces combinada con la discriminación por otros motivos, es repetidamente una de las razones para la denegación o la privación de la nacionalidad y, por tanto, constituye una causa de apatridia. La misma apatridia suele dar lugar a discriminación y, si las poblaciones apátridas pertenecen a minorías raciales o étnicas o a otras minorías, su carencia de nacionalidad puede reforzar las pautas de discriminación existentes.

76. Incluso en situaciones en que el marco jurídico brinda protección adecuada contra la discriminación racial y las formas conexas de intolerancia, su aplicación puede resultar problemática. Por ejemplo, los delitos contra refugiados y solicitantes de asilo motivados por prejuicios racistas son frecuentes en muchos países e incluyen casos de muerte, violencia física y sexual, hostigamiento verbal y amenazas, daños a la propiedad e incendio provocado. Aunque esos actos puedan estar prohibidos por la ley, la falta de denuncias o la inacción por parte de la policía y los tribunales pueden crear una cultura de impunidad. En particular, los solicitantes de asilo pueden no ser conscientes de los derechos y recursos jurídicos que los asisten, o mostrarse reacios a denunciar delitos motivados por prejuicios porque no tienen confianza en las autoridades o porque temen ser detenidos o deportados a causa de su situación irregular. Muchos países carecen de suficientes mecanismos de reunión de datos y a menudo no disponen de estadísticas oficiales sobre los delitos motivados por prejuicios.

77. Ciertos factores contribuyen a crear y reforzar estereotipos raciales negativos, en particular el tipo de discurso predominante en la política y en los medios de comunicación durante períodos de contracción económica. Este tipo de discurso tiende a caracterizar a los migrantes y los refugiados como amenazas al régimen de la seguridad social, a la economía o a la seguridad nacional. En muchos casos, los medios de comunicación solo informan sobre los refugiados y los solicitantes de asilo en contextos de delincuencia o de “abusos” del sistema de inmigración o de asistencia social, en lugar de mencionar las contribuciones positivas de los refugiados a la sociedad o las especiales dificultades que afrontan. Los propios políticos, que deberían condenar enérgicamente las actitudes y la violencia racistas, a menudo practican una retórica extremista, culpando a los migrantes y los refugiados de los problemas sociales y económicos o declarando la necesidad de

mantener una identidad nacional más homogénea. El sistema educativo también juega un importante papel en la formación de actitudes públicas, pero en muchos países, los planes de estudio de los colegios pasan por alto las contribuciones de las minorías raciales o dibujan una imagen negativa de las mismas.

78. Las personas de las que se ocupa el ACNUR a menudo ven como se les niegan derechos económicos y sociales esenciales o son discriminadas cuando tratan de obtener acceso a la sanidad, el empleo, la vivienda y la educación. Estos graves obstáculos a la integración social permanente pueden perpetuar aun más el círculo vicioso de la pobreza, la exclusión y la incompreensión. La discriminación racial y la xenofobia suponen enormes desafíos para los refugiados y los solicitantes de asilo a la hora de acceder a soluciones duraderas, porque estos problemas les impiden integrarse plenamente en los países de asilo, reasentamiento o repatriación.

79. Se recibió información de personas indígenas de los Estados Unidos de América y de las organizaciones que las agrupan sobre las dificultades que afrontan los navajos que viven en los Estados Unidos de América con respecto al racismo y la discriminación racial, incluidas la desigualdad ante la ley y la falta de acceso a la justicia y a recursos jurídicos. Dichas personas y organizaciones instaron a que se aplicara la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.

80. La organización Amis des étrangers au Togo proporcionó información sobre la discriminación contra las mujeres, los ancianos, las personas con discapacidad y las minorías étnicas en el Togo. Indicó que los migrantes eran objeto de particular marginación y discriminación, y que la discriminación por motivos de orientación sexual seguía siendo un problema en el Togo. Se hizo referencia a la tipificación de la homosexualidad como delito en el código penal.

81. La Asociación Lituania sin nazismo proporcionó información sobre la falsificación de la historia en Lituania. Indicó que esa falsificación contribuía a la rehabilitación del nazismo y era caldo de cultivo de manifestaciones nacionalistas y neonazis. La Asociación indicó que los permisos para organizar marchas nazis se expedían a nivel municipal, que en el ejército militaban personas que compartían la ideología nazi y que en el aniversario del nacimiento de Hitler se mostraban impunemente banderas y símbolos neonazis. Deben adoptarse medidas serias para prevenir el revisionismo de la Segunda Guerra Mundial, la negación del holocausto y el genocidio nazi, y la glorificación de los criminales nazis, que hacen crecer los sentimientos neonazis, xenófobos y antisemitas y avivan los conflictos interétnicos. También se mencionó la resolución aprobada en la conferencia celebrada el Día Internacional de la liberación de los prisioneros de campos de concentración nazis, que se conmemoró el 11 de abril de 2012 en Lituania.

82. La Asociación de derechos humanos en el Kurdistán iraní proporcionó información sobre la situación de los derechos humanos del pueblo kurdo en la República Islámica del Irán, incluidas la pobreza, la marginación y la discriminación sufrida en el ámbito del empleo, tanto en el sector público como en el privado, y en la educación, incluido el acceso a las universidades, que impiden su participación en la vida económica. La Asociación indicó además que, si bien en el artículo 15 de la Constitución iraní se reconocía el uso de los idiomas regionales y tribales, en la práctica el idioma kurdo no se enseñaba en las escuelas y no se usaba de manera efectiva en la vida pública.

83. El Centro de Recursos Badil de Defensa de los Derechos de los Refugiados Palestinos y de sus Derechos de Residencia proporcionó información acerca de la situación de los civiles palestinos en el territorio palestino ocupado, y recordó, a ese respecto, las observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial tras su examen del informe de Israel en 2012.

84. La organización British Irish Rights Watch proporcionó información sobre la situación en Irlanda del Norte e hizo hincapié en que era importante vigilar la vertiente de los derechos humanos en el conflicto y en el proceso de paz, integrar el respeto de los derechos humanos en todas las instituciones y difundir las enseñanzas sobre los derechos humanos adquiridas durante el conflicto, a fin de promover la paz y la reconciliación y prevenir nuevos conflictos.

85. Adalah, el Centro jurídico para los derechos de la minoría árabe en Israel, proporcionó información sobre el marco jurídico, político y normativo israelí y sus efectos en los ciudadanos árabes de Israel y los árabes beduinos de Naqab (Negev), en particular en lo que respecta a la pobreza, las desigualdades en la educación, el empleo y la salud, y la participación en la vida política y cultural.

IV. Conclusiones y recomendaciones

86. El Relator Especial expresa su agradecimiento a todos los Estados Miembros que facilitaron información sobre las medidas aplicadas de conformidad con la resolución 66/143 de la Asamblea General. También agradece la aportación de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, las organizaciones no gubernamentales y otras organizaciones. Observa con reconocimiento el aumento de las contribuciones recibidas tanto de los Estados como de las organizaciones no gubernamentales, y recuerda la importancia de que cooperen plenamente con su mandato como se estipula en la resolución 16/33 del Consejo de Derechos Humanos.

87. El Relator Especial observa que algunos Estados se refirieron en sus respuestas a la inexistencia en su territorio de los fenómenos señalados en la resolución 66/143 de la Asamblea General y a la escasa influencia de los partidos políticos de extrema derecha en la opinión pública de sus respectivos países. El Relator Especial quisiera destacar que los desafíos a la democracia y los derechos humanos que representan los partidos políticos, movimientos y grupos extremistas son universales y que ningún país es inmune a esos fenómenos. Exhorta a los Estados a asegurar una mayor vigilancia y fortalecer los esfuerzos y la voluntad política para reconocer esos fenómenos y hacerles frente de manera eficaz. A este respecto, como indicó en sus informes al Consejo de Derechos Humanos (A/HRC/20/33 y A/HRC/20/38), el Relator Especial recomienda que los Estados adopten un enfoque amplio basado en sólidos marcos jurídicos y preventivos, complementados por medidas fundamentales y aplicados de manera inclusiva y eficaz en consonancia con los instrumentos pertinentes, incluidos la Declaración y Programa de Acción de Durban y el documento final de la Conferencia de Examen de Durban.

88. El Relator Especial acoge con beneplácito la información proporcionada en relación con la ratificación de una serie de instrumentos, como la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, y su incorporación en el ordenamiento interno en el

plano constitucional. También aprecia que algunos Estados hayan reconocido que el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial es competente para recibir y examinar comunicaciones individuales. Insta a los Estados que aún no lo hayan hecho a que ratifiquen la Convención y formulen la declaración prevista en el artículo 14 de la Convención.

89. Varios países informaron al Relator Especial de que su constitución y su legislación respectivas consagraban los principios de igualdad y no discriminación y prohibían la incitación al odio racial, religioso y nacional. Algunos Estados también han incluido la discriminación basada en la orientación sexual en sus marcos jurídicos, lo cual aprecia el Relator Especial. Además, el Relator Especial observa que algunos países han aprobado legislación específica para hacer frente a los desafíos que suponen los partidos políticos, movimientos y grupos extremistas, y han elaborado disposiciones constitucionales o jurídicas para prohibir las organizaciones y asociaciones que inciten a la discriminación y al odio o a la violencia nacional, racial o religiosa y difundan la ideología fascista. Sin embargo, el Relator Especial también observa que algunos países cuyas constituciones respectivas prohíben la discriminación aún no han aprobado legislación sobre la discriminación racial. Observa además que cuando dicha legislación existe, no siempre incluye una definición de discriminación racial. El Relator Especial alienta a los Estados a que aprueben la legislación necesaria para combatir el racismo, velando al mismo tiempo por que la definición de discriminación racial sea acorde con el artículo 1 de la Convención. A este respecto, el Relator Especial recuerda que toda medida legislativa o constitucional que se adopte para contrarrestar a los partidos políticos, movimientos y grupos extremistas, incluidos los grupos neonazis y de cabezas rapadas y movimientos similares de ideología extremista, debe estar en conformidad con las normas internacionales pertinentes en materia de derechos humanos. Insta a los Estados a que respeten y cumplan plenamente sus obligaciones en virtud del artículo 4 de la Convención y los artículos 19, 20, 21 y 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

90. El Relator Especial observa con aprecio que varios Estados han incorporado al código penal una disposición según la cual la comisión de un delito por motivos racistas o xenófobos constituye una circunstancia agravante que permitirá endurecer las penas. Reitera la recomendación que formuló en su informe al Consejo de Derechos Humanos (A/HRC/20/38, párr. 19) y exhorta a los Estados a que velen por la aplicación efectiva de esas disposiciones a fin de prevenir y castigar los ataques racistas o xenófobos perpetrados por individuos o grupos estrechamente vinculados a partidos políticos, movimientos y grupos extremistas.

91. El Relator Especial acoge con beneplácito la información facilitada sobre las medidas adoptadas para prevenir la discriminación contra los miembros de minorías, los afrodescendientes, los romaníes, los migrantes, los refugiados y los solicitantes de asilo, y para garantizar su integración en la sociedad, pero, a la luz de la información proporcionada por el ACNUR, desea instar a los Estados a que garanticen la aplicación plena y efectiva de medidas jurídicas, normativas e institucionales dirigidas a esos grupos de personas. La brecha existente entre el marco jurídico e institucional y las dificultades que afrontan esos grupos vulnerables, especialmente cuando se trata de actos racistas y xenófobos por parte de individuos o grupos extremistas, sigue siendo motivo de especial

preocupación. Por lo tanto, el Relator Especial recomienda que los Estados garanticen de manera efectiva y sin discriminación de ningún tipo el derecho de esos grupos vulnerables a la seguridad y la justicia, incluso facilitándoles acceso a recursos eficaces, una reparación adecuada, asistencia letrada e información apropiada acerca de sus derechos, sin olvidar el enjuiciamiento y el castigo adecuados de los responsables de crímenes racistas contra ellos. A este respecto, el Relator Especial también desea recordar el párrafo 88 de la Declaración de Durban, en que se reconoce que los medios de comunicación deben representar la diversidad de la sociedad multicultural y desempeñar su función en la lucha contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia.

92. En algunas de las contribuciones recibidas se hizo referencia a las preocupaciones expresadas por el Relator Especial en su informe al Consejo de Derechos Humanos (A/HRC/20/38), especialmente en lo que respecta a los intentos de instrumentalizar a ciertos grupos, incluidos los migrantes, los refugiados y los solicitantes de asilo, utilizándolos como chivo expiatorio en el contexto de la crisis económica, así como la retórica nacionalista practicada por algunos partidos políticos tradicionales. El Relator Especial reitera las recomendaciones formuladas en el informe mencionado respecto de la responsabilidad de los dirigentes y los partidos políticos de condenar y abstenerse de difundir mensajes en los que se utilice como chivo expiatorio a grupos vulnerables y que inciten a la discriminación racial o la xenofobia.

93. El Relator Especial observa con interés las medidas institucionales adoptadas por los Estados para hacer frente al extremismo, concretamente mediante instituciones nacionales con un mandato general en materia de derechos humanos o un mandato específico de derechos humanos para combatir la discriminación racial, que además sean competentes para recibir y examinar denuncias particulares. Reitera que los Estados deben dotar a esas instituciones de los recursos necesarios, respetando plenamente su independencia, en consonancia con los Principios relativos al estatuto de las instituciones nacionales de promoción y protección de los derechos humanos (los Principios de París, que figuran en el anexo de la resolución 48/134 de la Asamblea General). El Relator Especial exhorta a los Estados que todavía no hayan establecido tales instituciones o cuyas instituciones no se ajustan a los Principios de París, a remediar esta situación.

94. El Relator Especial toma nota de la información relativa a la insuficiencia de los mecanismos de reunión de datos y la falta de estadísticas oficiales sobre los delitos motivados por prejuicios. Insta a los Estados a que reúnan datos sobre los incidentes de racismo y xenofobia, incluidos los perpetrados por personas afiliadas a partidos políticos, movimientos o grupos extremistas, respetando plenamente las normas internacionales de derechos humanos y con la participación de las víctimas y las organizaciones de la sociedad civil.

95. En las respuestas de los Estados se hace referencia a diversas iniciativas positivas, entre ellas actividades de sensibilización para promover la tolerancia, el respeto de la diversidad cultural y la comprensión mutua, y la organización de conferencias sobre el extremismo, charlas sobre el racismo e iniciativas encaminadas a acercar y unir comunidades diferentes. El Relator Especial opina que la organización de eventos culturales, actividades de investigación,

festivales, conferencias, seminarios, exposiciones y campañas de información ofrece otras medidas positivas que contribuyen a la construcción de una sociedad basada en el pluralismo y la no discriminación (A/65/323, párr. 110). Por lo tanto, alienta a los Estados a reforzar la aplicación de esas iniciativas a fin de prevenir la aparición y la influencia de ideologías extremistas basadas en la superioridad racial propagadas por partidos políticos, grupos y movimientos extremistas.

96. El Relator Especial acoge con beneplácito las actividades organizadas para capacitar a los agentes estatales, incluidos los agentes de policía y los funcionarios de inmigración, en materia de derechos humanos y no discriminación, así como la reunión de información sobre grupos extremistas. Alienta a los Estados a que adopten nuevas medidas orientadas a concienciar a la policía de las ideologías de partidos políticos, movimientos y grupos extremistas que incitan a la discriminación racial y la xenofobia. Además, recomienda que se fortalezca su capacidad para perseguir delitos de racismo y xenofobia y cooperar activamente con grupos y personas particularmente vulnerables a actos de racismo por parte de individuos o grupos extremistas.

97. Algunos Estados facilitaron información sobre el uso de Internet para fomentar una cultura de paz y tolerancia y sobre la creación de sitios web en que las personas pueden presentar denuncias contra un blog o sitio web con contenidos racistas. El Relator Especial acoge con beneplácito el enfoque positivo promovido en relación con la utilización de Internet, y recuerda a este respecto el párrafo 92 de la Declaración de Durban, en que los Estados reconocieron la necesidad de promover la utilización de nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, particularmente Internet, para contribuir a la lucha contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia. El Relator Especial recomienda además que se apliquen las recomendaciones formuladas en su informe a la Asamblea General sobre el racismo e Internet.

98. El Relator Especial acoge con beneplácito las medidas articuladas por algunos Estados para impedir que los partidos políticos, movimientos y grupos extremistas ejerzan su influencia negativa en la juventud, sin olvidar las medidas educativas y los cursos destinados a sensibilizar a los niños pequeños y desarrollar su capacidad de relacionarse en un entorno multiétnico y multiconfesional. El Relator Especial recomienda que se adopten más medidas para crear conciencia entre los jóvenes acerca de los peligros de las ideologías y las actividades de partidos políticos, movimientos y grupos extremistas. A este respecto, la educación en general y la educación en la esfera de los derechos humanos en particular siguen siendo un instrumento fundamental para contrarrestar la influencia de esas ideologías entre los jóvenes.

99. El Relator Especial observa con reconocimiento que en algunas respuestas se pone de relieve la educación en la esfera de los derechos humanos. Agradece en particular la información proporcionada acerca del estudio del idioma, la historia y la cultura de las distintas minorías étnicas en las escuelas, la inclusión de la cuestión del Holocausto en los planes de estudios y la incorporación de los principios de los derechos humanos y la cultura de tolerancia en los programas de estudio a todos los niveles. El Relator Especial recomienda que los Estados sigan invirtiendo en educación a fin de transformar actitudes y corregir ideas

de superioridad y jerarquías raciales promovidas por partidos políticos, movimientos y grupos extremistas y contrarrestar su influencia negativa. Recomienda además la cooperación con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en particular en el marco de los programas pertinentes establecidos por la organización en relación con la educación en la esfera de los derechos humanos, el racismo y la discriminación racial.

100. El Relator Especial acoge con beneplácito la información sobre la coordinación entre las diferentes estructuras gubernamentales a fin de lograr la máxima eficacia en los esfuerzos sobre la cuestión de la igualdad y la no discriminación. Alienta a que se desplieguen esos esfuerzos coordinados, y también recomienda la inclusión de diversas instancias, entre ellas instancias de la sociedad civil y las instituciones nacionales de derechos humanos. Además, el Relator Especial acoge complacido las iniciativas emprendidas para asegurar la cooperación a nivel regional, concretamente mediante la celebración de seminarios y conferencias y la ratificación de los instrumentos regionales pertinentes en materia de derechos humanos. Reitera las recomendaciones formuladas por su predecesor sobre la importancia de cooperar estrechamente con la sociedad civil y los mecanismos internacionales y regionales de derechos humanos a fin de contrarrestar de manera eficaz a los partidos políticos, movimientos y grupos extremistas, incluidos los grupos neonazis y de cabezas rapadas y movimientos similares de ideología extremista.